

# Tributación local y práctica de todos los bienes especiales (BICES)

JAVIER GONZALO MIGUELÁÑEZ

PRÓLOGO

D. FERNANDO DE ARAGÓN  
*DIRECTOR GENERAL DEL CATASTRO*

© Javier Gonzalo Migueláñez, 2025  
© ARANZADI LA LEY, S.A.U.

**ARANZADI LA LEY, S.A.U.**

C/ Collado Mediano, 9  
28231 Las Rozas (Madrid)  
www.aranzadilaley.es

**Atención al cliente:** <https://areacliente.aranzadilaley.es/publicaciones>

**Primera edición:** 2025

**Depósito Legal:** M-24544-2025

**ISBN versión impresa:** 978-84-1085-467-3

**ISBN versión electrónica:** 978-84-1085-468-0

Diseño, Preimpresión e Impresión: ARANZADI LA LEY, S.A.U.

*Printed in Spain*

© ARANZADI LA LEY, S.A.U. Todos los derechos reservados. A los efectos del art. 32 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba la Ley de Propiedad Intelectual, ARANZADI LA LEY, S.A.U., se opone expresamente a cualquier utilización del contenido de esta publicación sin su expresa autorización, lo cual incluye especialmente cualquier reproducción, modificación, registro, copia, explotación, distribución, comunicación, transmisión, envío, reutilización, publicación, tratamiento o cualquier otra utilización total o parcial en cualquier modo, medio o formato de esta publicación.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la Ley. Diríjase a **Cedro** (Centro Español de Derechos Reprográficos, [www.cedro.org](http://www.cedro.org)) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

El editor y los autores no asumirán ningún tipo de responsabilidad que pueda derivarse frente a terceros como consecuencia de la utilización total o parcial de cualquier modo y en cualquier medio o formato de esta publicación (reproducción, modificación, registro, copia, explotación, distribución, comunicación pública, transformación, publicación, reutilización, etc.) que no haya sido expresa y previamente autorizada.

El editor y los autores no aceptarán responsabilidades por las posibles consecuencias ocasionadas a las personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en esta publicación.

ARANZADI LA LEY no será responsable de las opiniones vertidas por los autores de los contenidos, así como en foros, chats, u cualesquiera otras herramientas de participación. Igualmente, ARANZADI LA LEY se exime de las posibles vulneraciones de derechos de propiedad intelectual y que sean imputables a dichos autores.

ARANZADI LA LEY queda eximida de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición o recibidos, obtenidos o a los que se haya accedido a través de sus PRO-DUCTOS. Ni tampoco por los Contenidos prestados u ofertados por terceras personas o entidades.

ARANZADI LA LEY se reserva el derecho de eliminación de aquellos contenidos que resulten inveraces, inexactos y contrarios a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres.

**Nota de la Editorial:** El texto de las resoluciones judiciales contenido en las publicaciones y productos de **ARANZADI LA LEY, S.A.U.**, es suministrado por el Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial (Cendoj), excepto aquellas que puntualmente nos han sido proporcionadas por parte de los gabinetes de comunicación de los órganos judiciales colegiados. El Cendoj es el único organismo legalmente facultado para la recopilación de dichas resoluciones. El tratamiento de los datos de carácter personal contenidos en dichas resoluciones es realizado directamente por el citado organismo, desde julio de 2003, con sus propios criterios en cumplimiento de la normativa vigente sobre el particular, siendo por tanto de su exclusiva responsabilidad cualquier error o incidencia en esta materia.

## *Índice General*

	<u>Página</u>
INTRODUCCIÓN.....	17
HOMENAJES Y DEDICATORIAS DEL AUTOR .....	23
PRÓLOGO .....	25
 CAPÍTULO 1	
<b>EL NACIMIENTO DEL MÁS IMPORTANTE IMPUESTO LOCAL, EL IBI, AGOTANDO LAS VIEJAS CONTRIBUCIONES URBANAS Y RÚSTICAS. DESAPARICIÓN DE AQUELLAS Y REGULACIÓN DEL PRINCIPAL IMPUESTO LOCAL, EL IBI, CON VOCACIÓN DE APLICARSE TAMBIÉN A ALGUNAS ACTIVIDADES, GRANDES INFRAESTRUCTURAS, AHORA BICES.....</b>	<b>27</b>
1. ¿Cuál es el derecho de los Ayuntamientos a obtener ingresos tributarios de las infraestructuras? .....	32
2. Las infraestructuras que hoy son BICES, y la repercusión económica favorable en el territorio de los Ayuntamientos .....	36
3. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las grandes infraestructuras y su prevalencia sobre la tributación autonómica. Se cita la defensa frustrada del mismo impuesto, pero autonómico por parte de Extremadura, donde los Tribunales advirtieron de que no podían cercenarse los Tributos locales .....	36

4.	La Doctrina del Tribunal Constitucional en la pugna con las Comunidades Autónomas se ha aclarado posteriormente, aunque se halla pendiente la definitiva defensa de la insuficiencia financiera (142 CE) .....	43
5.	De qué infraestructuras hablamos al objeto de su tributación en el IBI .....	43
6.	La regulación de la tributación de las infraestructuras en el Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) en la Ley originaria 39/1988 de haciendas locales. No habían nacido aún los BICES .....	44

## CAPÍTULO 2

<b>LA PRÁCTICA ADMINISTRATIVA Y JURISPRUDENCIAL DESDE EL NACIMIENTO DEL IBI (1990) HASTA LA TRIBUTACIÓN DE TODAS LAS INFRAESTRUCTURAS (2015) .....</b>	<b>49</b>
1. La puesta en tributación de las primeras infraestructuras energéticas: Centrales Nucleares .....	50
2. La encomiable actividad del Catastro en el grupo de infraestructuras.....	52
3. Los sistemas de valoración y el Valor de Mercado de estos inmuebles «singulares» .....	62
4. El valor de mercado en las primeras ponencias de 1990-1992 para las grandes infraestructuras hidráulicas .	67
5. Trámites de notificación de valores en el desarrollo de la Ley 39/1988 en estas grandes infraestructuras hidroeléctricas .....	69
6. La posición del Estado y su abogacía del Estado en contra de tal doctrina, defendiendo las Presas y embalses públicos, administradas por las Confederaciones Hidrográficas	83
7. La fundamental aclaración de la Ley 59/1998 .....	87
8. Apuntes interesantes, de la práctica jurisprudencial en los supuestos del embalse y de la tributación del mismo como IBI-urbano .....	87

9. Cómo aplicaba la exención del artículo 64.a) el Tribunal Supremo, hoy (2025) aún vigente literalmente . . . . .	91
--	----

### CAPÍTULO 3

<b>LA GRAN REFORMA DEL IBI PARA UNA MEJOR TRIBUTACIÓN LOCAL DE LAS GRANDES INFRAESTRUCTURAS. LOS BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, QUE CONOCEREMOS EN ADELANTE COMO LOS BICES. PRÁCTICA PROCESAL .</b>	<b>97</b>
--	-----------

1. Diez años de experiencia en el IBI para la reforma de las Haciendas Locales en el año 2002. . . . .	97
2. Las propuestas municipales de Reforma del IBI y la primera Ley del Catastro Inmobiliario 48/2002. . . . .	99
3. La Experiencia en la aplicación del IBI en algunos precedentes de los BICES, las Centrales Hidroeléctricas y embalses . . . . .	101
4. Tramitación de la Reforma de la Legislación Catastral y de la Ley 39/1988 de Haciendas Locales en la Ley 51/2002. . . . .	118
5. Trámite ante el Catastro y Ayuntamientos. . . . .	121
6. Aportaciones teniendo en cuenta la legislación de aguas .	124
7. Así se logró introducir una Enmienda-proposición en el Senado . . . . .	126
8. Pasa de nuevo al Congreso para la aprobación definitiva .	132
9. Los nuevos BICES en la nueva Ley 48/2002 del Catastro Inmobiliario . . . . .	133
10. La aplicación transitoria a los nuevos BICES de la Ley 48/2002. . . . .	135
Anexo práctico de las impugnaciones. . . . .	136
1. <i>Impugnación Valor Catastral o ponencia de valores ante la Audiencia Nacional.</i> . . . .	136
1.1. Desarrollo-contestación de los tribunales a cada alegación de los titulares de infraestructuras . . . . .	137

2.	<i>Impugnación liquidaciones de las cuotas tributarias: Tribunales competentes Juzgados de lo contencioso-administrativo</i> .....	144
2.1.	Cita de argumentos empresas hidroeléctricas .	144
2.2.	Cuestión preliminar .....	145

## CAPÍTULO 4

<b>EL REFUNDIDO DE LAS NUEVAS LEYES DEL CATASTRO Y DE REFORMA DE LAS HACIENDAS LOCALES. EL CATASTRO COMO INSTITUCIÓN BÁSICA</b> .....	149
1. La institución del Catastro .....	150
1.1. <i>Historia del Catastro en España</i> .....	150
2. El Catastro como instrumento tributario básico: bases catastrales para la aplicación y recaudación de los tributos locales, en especial el IBI .....	153
3. Las funciones del Catastro .....	154
4. Usos del Catastro. ....	155
4.1. <i>Fiscales</i> .....	156
4.2. <i>Usos jurídicos sustancialmente como apoyo al Registro de la Propiedad</i> .....	157
5. La Normativa del Catastro .....	160
6. La coordinación Catastro con los registros de la propiedad .....	164

## CAPÍTULO 5

<b>LOS PROBLEMAS PRÁCTICOS SURGIDOS EN EL DESARROLLO DE LAS LEYES DEL CATASTRO Y DE HACIENDAS LOCALES. SUS DOS GRANDES REGLAMENTOS APLICABLES A LOS BICES.</b> .....	167
1. El RD. 417/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Catastro Inmobiliario. Gestación, discusión e impugnación ante los tribunales .....	167

	<i><u>Página</u></i>
1.1. <i>El primer Reglamento de desarrollo de la Ley del Catastro y su litigiosidad . . . . .</i>	168
1.2. <i>La propuesta y por ello el trabajo de la Comisión, venía seguida de las siguiente MOTIVACIÓN . . . . .</i>	172
1.3. <i>Otro factor, sobre la limitación teniendo en cuenta los Hm<sup>3</sup> del embalse. . . . .</i>	174
1.4. <i>Las impugnaciones de las patronales titulares concesionarias de los BICES . . . . .</i>	175
1.5. <i>La impugnación del RD 417/2006 por parte del sector eléctrico UNESA, hoy denominada «AELEC» . . . . .</i>	175
1.6. <i>El Tribunal Supremo rechazó el Recurso de UNESA mediante una esclarecedora Fundamentación Jurídica. . . . .</i>	190
1.7. <i>Las consecuencias de la Sentencia del Tribunal Supremo, validando el RD 417/2006 de desarrollo de la Ley del Catastro, esencialmente para el IBI BICES. . . . .</i>	194
2. <b>El segundo de los reglamentos de Desarrollo de la Ley del Catastro. El Real Decreto 1464/2007 de 2 de noviembre (BOE del 20). . . . .</b>	195
3. <b>La tramitación del Real Decreto 1464/2007 por el que se aprueban las normas de valoración de todos los BICES y la Sentencia del Tribunal Supremo convalidando el Real Decreto en Sentencia del año 2010. . . . .</b>	204

## CAPÍTULO 6

<b>LA BASE JURÍDICA PARA EL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LAS NORMAS DE VALORACIÓN DE LOS BICES, EL CONTENIDO DE LAS PONENCIAS Y NORMAS DE VALORACIÓN DE LOS BICES COMO MANDATO REGLAMENTARIO DETERMINADO POR EL TR DE LA LEY DEL CATASTRO ARTÍCULOS 22 A 31 . . . . .</b>	205
1. <b>La trascendencia municipal tributaria de los BICES a partir de las Leyes de 2002. . . . .</b>	205
2. <b>Consideración de los nuevos titulares catastrales y los nuevos sujetos pasivos de los BICES . . . . .</b>	206

3.	Esencial contenido de Reglamento aprobado por RD 1464/2007, las valoraciones catastrales de los diferentes grupos de BICES .....	210
4.	Los bienes inmuebles destinados a la producción de gas ..	219
5.	Los destinados al refinado del petróleo .....	221
6.	Normas para Valor Catastral de las centrales nucleares de España .....	223
7.	La valoración de los embalses, aunque al tiempo que las centrales, cuando existan .....	237
8.	Valoración de las vías de comunicación terrestres .....	238
9.	Y se llegaba así a los nuevos BICES AEROPUERTOS....	239
10.	Y de forma similar a otro BICES, los relacionados en el apartado d.2 del art. 23 del Reglamento .....	242
	Anexo práctico: Litigiosidad y defensa de los municipios ante los tribunales en medio de la reforma operada por las Leyes 48 y 51/2002 .....	246

## CAPÍTULO 7

	LA VALORACIÓN DE LOS NUEVOS BICES CON LOS TEXTOS REFUNDIDOS DE 2004 Y SUS REGLAMENTOS DE DESARROLLO.....	255
1.	¿Qué es la ponencia de valores? .....	259
2.	¿Es obligatorio la incorporación al Catastro? Rotundamente sí.....	260
3.	Así se regula la nueva Gestión Catastral y la valoración de los nuevos BICES.....	262
4.	La historia del Valor Catastral, útil para los nuevos BICES: precedentes jurisprudenciales.....	263
5.	El tratamiento de los valores catastrales de los nuevos BICES .....	274
5.1.	La fijación o cálculo del valor catastral de los nuevos BICES.....	276



	<i><u>Página</u></i>
5.2. <i>La posición firme de los municipios en apoyo del Catastro y contra los recursos de la entonces patronal UNESA también contra aquella Orden . . . . .</i>	286
6. <b>La referencia de las <i>Sentencias de 12 y 15 de enero de 2007</i>: pese a que la Jurisprudencia de los BICES se produce más allá de 2008, la Jurisprudencia ha mantenido su doctrina o «bebido» de la primitiva . . . . .</b>	289
7. <b>La definitiva gestión catastral en los BICES actualmente</b>	291
8. <b>La actualidad en la práctica de la gestión de los nuevos BICES . . . . .</b>	294
9. <b>Contenido y estructura de la nueva gestión catastral. El valor de los nuevos BICES, vigente en la actualidad . . . . .</b>	298
10. <b>El Valor Catastral de todas las grandes Infraestructuras Hidroeléctricas, del art. 8 TRLCI, COMO BICES a efectos del IBI . . . . .</b>	305
11. <b>El nuevo proceso de Gestión Catastral común a todos los BICES en la actualidad . . . . .</b>	308
12. <b>Excepcionalidad notificación valores para el año 2008: Primer año de vigencia de los nuevos valores . . . . .</b>	315
13. <b>Impugnaciones y recursos. . . . .</b>	316
14. <b>Atacar el Valor Catastral con el argumento de los ayuntamientos de que es inferior al Valor Real de los BICES. . . . .</b>	316
15. <b>Surgía como novedad, la polémica por la diferencia entre el Valor Catastral y Valor Real. . . . .</b>	319
16. <b>Valores reales <i>versus</i> valores catastrales . . . . .</b>	320

## CAPÍTULO 8

<b>EL JUICIO DE LOS TRIBUNALES A LA CONVALIDACIÓN DE LA REFORMA DE LOS NUEVOS BICES . . . . .</b>	325
1. <b>Las impugnaciones en vía de gestión Tributaria . . . . .</b>	328
2. <b>Práctica municipal en este trámite. . . . .</b>	331
3. <b>Los Ayuntamientos logran ganar las batallas, pero no la guerra. . . . .</b>	334

## CAPÍTULO 9

<b>EL VETO A LOS AYUNTAMIENTOS EN LOS TRÁMITES DE GESTIÓN CATASTRAL. ....</b>	<b>345</b>
1. Fue la propia administración, no necesariamente la catastral sino la central desde el Ministerio de Hacienda quien, a nuestro juicio, vetaba, sistemáticamente la legitimidad de éstos en los trámites de gestión catastral .....	345
2. El fin del veto: la nueva doctrina de los tribunales desde 2022 a 2025. El fin de la pesadilla para los Ayuntamientos	351
3. ¿Cuáles eran los fundamentos de los Ayuntamientos contra el veto demandando plena legitimidad?.....	353
4. Las sentencias definitivas en 2022, de la legitimidad de los Ayuntamientos con BICES .....	358
5. ¿Cuál era en síntesis la fundamentación de la legitimidad en general de todos los Ayuntamientos con BICES?.....	359
6. Especial conflictividad reciente, 2025 en los complejos BICES todos ellos en el Pirineo .....	364
7. La actualidad en el año 2025 de las actuaciones llevadas a cabo por los ayuntamientos.....	365

## CAPÍTULO 10

<b>TODOS LOS «BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES» (BICES). ....</b>	<b>369</b>
1. La realidad jurídica de los BICES .....	373
2. La importancia de la delimitación conceptual de todos los BICES .....	376
3. Otro de los BICES, las refinerías de petróleo.....	378

## *Capítulo 1*

El nacimiento del más importante impuesto local, el IBI, agotando las viejas contribuciones urbanas y rústicas. Desaparición de aquellas y regulación del principal impuesto local, el IBI, con vocación de aplicarse también a algunas actividades, grandes infraestructuras, ahora BICES

SUMARIO: 1. ¿CUÁL ES EL DERECHO DE LOS AYUNTAMIENTOS A OBTENER INGRESOS TRIBUTARIOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS? 2. LAS INFRAESTRUCTURAS QUE HOY SON BICES, Y LA REPERCUSIÓN ECONÓMICA FAVORABLE EN EL TERRITORIO DE LOS AYUNTAMIENTOS. 3. EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE LAS GRANDES INFRAESTRUCTURAS Y SU PREVALENCIA SOBRE LA TRIBUTACIÓN AUTONÓMICA. SE CITA LA DEFENSA FRUSTRADA DEL MISMO IMPUESTO, PERO AUTONÓMICO POR PARTE DE EXTREMADURA, DONDE LOS TRIBUNALES ADVIRTIERON DE QUE NO PODÍAN CERCENARSE LOS TRIBUTOS LOCALES. 4. LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LA PUGNA CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SE HA ACLARADO POSTERIORMENTE, AUNQUE SE HALLA PENDIENTE LA DEFINITIVA DEFENSA DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA (142 CE). 5. DE QUÉ INFRAESTRUCTURAS HABLAMOS AL OBJETO DE SU TRIBUTACIÓN EN EL IBI. 6. LA REGULACIÓN DE LA TRIBUTACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) EN LA LEY ORIGINARIA 39/1988 DE HACIENDAS LOCALES. NO HABÍAN NACIDO AÚN LOS BICES.

La aprobación, como adelantábamos, de la Ley 39/1988, primera ley de la democracia en materia de financiación de las entidades locales, se hallaba llena de novedades; pasábamos de un sistema de tributos estatales a la propiedad, cuyo importe se trasladaba desde el poder central a los Ayuntamientos mediante recargos al sujeto pasivo, a un sistema de tributos propios de los Ayuntamientos, como reconoce la Constitución de 1978.

Así, nos parece destacable, como ya lo hemos hecho en otras intervenciones, la Exposición de Motivos de mi primera obra de 2007, que también debo a Aranzadi-La Ley, que recoge la intención del legislador en tan novedosa reforma de la Hacienda Local:

*«La racionalización del sistema tributario local exigía superar una situación en la que éste estaba integrado por una larga lista de tasas y contribuciones especiales, y por un conjunto de hasta diez figuras impositivas distintas, desconectadas entre sí y carentes de una justificación común».*

Y citando expresamente uno de los pilares constitucionales de los entes locales:

*«El Principio de Autonomía, referido al ámbito de la actividad financiera local, se traduce en la capacidad de las Entidades Locales para gobernar sus respectivas haciendas. Esta capacidad implica algo más que la supresión de la tutela financiera del Estado sobre el sector local involucrando a las propias corporaciones en el proceso de obtención y empleo de sus recursos financieros y permitiéndoles incidir en la determinación del volumen de los mismos y en la libre organización de su gasto, tal y como ha declarado expresamente el Tribunal Constitucional en su labor integradora de la norma fundamental».*

Y en otro lugar:

*«Partiendo de la situación descrita, se han llevado a cabo las siguientes acciones; la primera, delimitar la materia imponible reservada a la tributación local; en segundo lugar, y en función de tal delimitación, se han creado las figuras impositivas más adecuadas para el mejor y más racional aprovechamiento de esa materia imponible, y por último, se ha procedido a la supresión de muchos de aquellos tributos que hasta la presente reforma incidían directa e indirectamente en la materia imponible sujeta a las nuevas figuras impositivas».*

Así que concreta lo que desarrollará luego en el propio texto de la Ley, como grandes novedades:

*«Esta triple actuación se ha traducido en la creación de tres grandes impuestos, a saber, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.*

*La implantación del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles ha supuesto la supresión de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria la Contribución Territorial Urbana y el Impuesto Municipal sobre Solares.*

*Hasta entonces las sucesivas leyes de régimen local o los apartados de la misma destinados a los recursos de los Ayuntamientos y demás entidades locales, lo era a través de la ancestral sistema de pagar al Estado las contribuciones de rústica y urbana...».*

No había bienes especiales, sino que las infraestructuras que hoy son BICES, eran considerados como BIENES URBANOS, dado que la Ley solo

reconocía con la categoría de bienes inmuebles, a efectos tributarios, a los rústicos y a los urbanos.

A primera vista podría pensarse que, aunque urbanos, al menos pagarían IBI desde el año 1990, en que la Ley 39/1988 preveía la entrada en vigor del nuevo impuesto, el IBI.

Y así las Disposiciones transitorias de la Ley establecían a este respecto:

*Segunda*

*1. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, comenzará a exigirse en todo el territorio nacional, a partir del día 1 de enero de 1990. Respecto de los bienes inmuebles de naturaleza urbana el impuesto se exigirá aplicando los valores catastrales vigentes en la fecha indicada a efectos de la Contribución Territorial Urbana, hasta tanto no se proceda a la fijación de los mismos con arreglo, a las normas contenidas en la presente Ley. Respecto de los bienes inmuebles de naturaleza rústica, y hasta tanto no se produzca esta última circunstancia, el impuesto se exigirá aplicando como valor catastral de dichos bienes el resultado de capitalizar al 3 por 100 el importe de las bases liquidables vigentes en la misma fecha a efectos de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria.*

*Hasta la fecha indicada en el apartado anterior continuarán exigiéndose las Contribuciones Territoriales Rústica y Pecuaria y Urbana, y hasta la misma fecha, los Ayuntamientos podrán continuar exigiendo el Impuesto Municipal sobre Solares.*

*2. Quienes a la fecha de comienzo de aplicación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles gocen de cualquier clase de beneficio fiscal en la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria o en la Contribución Territorial Urbana, continuarán disfrutando de los mismos en el impuesto citado en primer lugar, hasta la fecha de su extinción y, si no tuvieran término de disfrute, hasta el 31 de diciembre de 1992, inclusive.*

En otras palabras, hasta el año 1990 no se exigirá como tal el IBI y hasta entonces, los bienes inmuebles debían seguir pagando al Estado, no a los ayuntamientos, la «vieja contribución», en el caso de las infraestructuras, urbana, hasta el año 1992.

Pero esto no fue así en todos los inmuebles porque determinadas infraestructuras, luego consideradas BIENES ESPECIALES desde 2002, se hallaron EXENTAS, dado que un año más tarde de la aprobación de la Ley de Régimen local, Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen local y sobre todo su desarrollo reglamentario o refundido, se aprobó el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprobaba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, que recogía la exención de contribuir a determinadas infraestructuras como hecho imponible de la nueva tributación en la ley 39/1988.

Las figuras tributarias establecidas en origen por la Ley de Haciendas Locales 39/1988 de 28 de diciembre (en adelante LHL) susceptibles de TRIBUTA-

CIÓN como GRANDES INFRAESTRUCTURAS, eran el nuevo Impuesto sobre Actividades Económicas (en adelante IAE), el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (en adelante el IBI), el Impuesto sobre Construcciones, obras e instalaciones (en adelante el ICIO), las Tasas por el otorgamiento de licencia medioambiental, de actividad o de obras y destacable por el escaso desarrollo legal que ha tenido hasta la fecha, la Tasa por el aprovechamiento especial y el uso del dominio público local, cada vez más importante.

Generalmente cuando hablamos del término «infraestructuras» lo asimilamos a OBRA PÚBLICA y así nos entendemos mejor: obra pública o GRAN OBRA, con la primitiva Ley 13/2003 de 23 de mayo, y las actuales Leyes de Urbanismo de las Comunidades autónomas, requieren de autorizaciones administrativas centrales, autonómicas o locales, y también, aunque mediante informes y regulaciones especiales, cuando estas infraestructuras usan o aprovechan, en muchas ocasiones, del dominio público o aprovechamiento del mismo, ya sea en terrenos, o uso de aguas públicas.

Por grandes infraestructuras siempre habíamos identificado a los grandes Puentes y Viaductos, las Presas y embalses, las Centrales Hidroeléctricas, las Centrales Nucleares, las Centrales térmicas y de Ciclo Combinado, los Parques eólicos, las Autopistas y túneles, los Puertos comerciales, los Puertos Deportivos, las Refinerías de petróleo, los Gaseoductos, los Almacenamientos de residuos sólidos y radioactivos, las Obras ferroviarias (AVE), los Aeropuertos, las infraestructuras de telecomunicaciones, etc.

Se trata de toda una materia en el plano de los tributos, sobre los que los Ayuntamientos ejercen competencias en más o menos grado de importancia, sobre las infraestructuras o grandes obras y las que aquí analizaremos son todas ellas fuentes, como veremos de tributar sus titulares o concesionarios en el IBI.

La afectación territorial de las infraestructuras es ELEVADA en cuanto se encuadran en esferas, en principio, competenciales de los Ayuntamientos regulados en las LEYES DE RÉGIMEN LOCAL, tanto estatales como autonómicas, como en materia de urbanismo, el medio ambiente, el procedimiento reglado de otorgamientos de licencia y el devengo de Tributos Locales.

Así:

- En materias urbanísticas inciden en la aplicación o no de las LEYES DEL SUELO y en el planeamiento.
- En materias demaniales y su incidencia en el ámbito del dominio público (redes, tuberías, telecomunicaciones etc.) uso del dominio público, CONCESIONES, etc., le es de aplicación la legislación específica de las Leyes de Régimen Local y de su Patrimonio, luego de las Leyes de Patrimonio estatal que constituyen legislación básica.

- En materias medioambientales: El artículo 45 C.E. establece: «todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado....y tienen el deber de conservarlo». La intervención de los Ayuntamientos en la construcción de las infraestructuras está reglada mediante el otorgamiento de la **licencia de obras, actividad y apertura** en la que además es de aplicación la Directiva de Medio Ambiente y su transposición al derecho español por Real Decreto legislativo 1302/1986 de 28 de junio, Ley 6/2001 de 8 de mayo y más adelante la actual Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y Leyes de las CCAA. En la práctica es muy poco el margen de actuación de la Administración Local.

Es cierto que las Leyes de Régimen Local y sus Reglamentos establecen las facultades de los Ayuntamientos en el ámbito urbanístico, demanial, medioambiental y naturalmente fiscal:

- Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, atribuye estas competencias a los ayuntamientos (artículos 7, 8 y 25), así como los Reglamentos de Servicios estatal y autonómicos (art. 9, 10 y 66 del Texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña, por ejemplo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2003 de 28 de abril).
- Todas las nuevas Leyes del Suelo y Urbanismo de las CCAA también recogen competencias municipales, pero no de primer orden en el caso de las grandes infraestructuras.

Para construir una infraestructura se requiere, no sólo de un proyecto, sino de una autorización administrativa (Ministerio o Consejería de la CCAA) y por afectar su establecimiento a un concreto territorio, el municipio, debe tener en cuenta si en la esfera de las competencias municipales, debe el Ayuntamiento pronunciarse mediante informes o licencias y completar así el ciclo de trámites hasta la construcción de la infraestructura.

En ocasiones, como sucede en la mayor parte de las infraestructuras, no sólo se le detraen competencias al Ayuntamiento, sino que se le obliga a adecuarse urbanísticamente hablando.

Hablar en esta obra de **infraestructuras** tiene como razón y objetivo LA TRIBUTACIÓN LOCAL GENÉRICA DE LAS MISMAS, como las que hemos dejado enunciadas, oportunidad Legislativa que surgió «en inicio» de la Ley 39/1988 (LHL) especialmente en el análisis y aplicación del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

Como en otras ocasiones hemos enunciado, cabe hacer una seria reflexión: ¿qué aportan estas grandes obras a los municipios? ¿tributan o deben tributar a los Ayuntamientos para paliar los efectos de su implantación y afectación como

si de una actividad cualquiera se tratase, o deben considerarse que son sustancialmente diferentes las infraestructuras energéticas de cualquier otra actividad por su mayor afectación territorial y en consecuencia deben tributar en mayor cuantía?

Las infraestructuras, todas ellas, las energéticas, los aeropuertos, los puertos, las comunicaciones etc. suponen una importantísima AFECTACIÓN TERRITORIAL; pero por voluntad del legislador demócrata, han resultado ser una IMPORTANTE FUENTE DE RIQUEZA municipal al tributar como IBI, además de que las mismas se implantan en territorios, normalmente pobre, en zona montañosa y despoblada, para cuya construcción, además, se ha visto afectado el patrimonio de los habitantes de municipios, a quienes por la vía legal de la ocupación y expropiación se les ha privado, «legalmente» de los terrenos por tratarse, muchas de aquellas, de obras de interés nacional y materia de primera necesidad, pese a la reacción en contra de determinados sectores conocidos como «los verdes».

No puede dejar de mencionarse que la inicial ventaja en la instalación y establecimiento de las grandes infraestructuras, es que crean puestos de trabajo, pero sólo mientras se construyen; por ello deben soportar y soportan los tributos locales que por la envergadura de las OBRAS, suponen ciertamente, desde 1990 **importantes ingresos** a los Municipios.

Como es obvio las Leyes estatales reguladoras, preservan las Haciendas Forales de los Territorios Históricos del País Vasco y de Navarra, con legislación tributaria local propia, pero por lo demás la Ley de Haciendas Locales es una LEY BÁSICA para todo el Estado.

## **1. ¿CUÁL ES EL DERECHO DE LOS AYUNTAMIENTOS A OBTENER INGRESOS TRIBUTARIOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS?**

Consagrado el principio de autonomía local que garantiza la Constitución en su artículo 140, como también se recoge en el Derecho comunitario y plasmado en el artículo 4 de la Carta Europea de Autonomía Local hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985, y ratificada por España por Instrumento de 20 de enero de 1988, procede detenernos en el alcance jurídico que ello va a tener para amparar una tributación justa de las grandes infraestructuras energéticas en el ámbito local.

Los principios constitucionales que amparan la aplicación de los Tributos Locales en general y de forma especial en las infraestructuras nacen de nuestra Constitución, en su artículo 142, al establecer que las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones Locales, consagrándose así el principio de



suficiencia financiera, que es vital, junto con el de autonomía local, reconocido en los artículos 137 y 140 del texto constitucional, para los Ayuntamientos.

El citado principio de suficiencia financiera no garantiza ciertamente a las Corporaciones Locales una autonomía económica financiera en el sentido pleno para disponer de medios propios patrimoniales y tributarios suficientes para el cumplimiento de sus funciones; sí que dispone la suficiencia de tales medios, tal como se declaró por la Sentencia temprana del Tribunal Constitucional 96/1990, de 24 de mayo (R.<sup>a</sup> 1990, 96), suficiencia ésta que es la única que posibilita la consecución efectiva de la autonomía constitucionalmente garantizada, ya que sin medios económicos difícilmente ningún ente público podría realmente diseñar y desarrollar políticas propias ni ejercer, de forma efectiva, las competencias que se le asignen, que son muchas y variadas en el ámbito de las Entidades Locales, se tiende cada vez más a expandirse y a ser más numerosas, lo que encuentra su justificación final en que son las Administraciones más próximas y cercanas a los ciudadanos; baste ver la larga relación de competencias y servicios que atribuye a los municipios la LBRL 7/1985 en su artículo 25:

*«1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.*

*2. El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:*

- a) *Seguridad en lugares públicos.*
- b) *Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.*
- c) *Protección civil, prevención y extinción de incendios.*
- d) *Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales.*
- e) *Patrimonio histórico-artístico.*
- f) *Protección del medio ambiente.*
- g) *Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores.*
- h) *Protección de la salubridad pública.*
- i) *Participación en la gestión de la atención primaria de la salud.*
- j) *Cementerios y servicios funerarios.*
- k) *Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.*

- l) *Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.*
- ll) *Transporte público de viajeros.*
- m) *Actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo.*
- n) *Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.*

*3. Sólo la Ley determina las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo, de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2».*

Una de las expresiones normativas concretas con la que se ha tratado de dotar de contenido al referido principio de suficiencia financiera, se recoge en el artículo 9.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales actual (TR LRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al señalarse en él que: *«Las leyes por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de tributos locales determinarán las fórmulas de compensación que procedan; dichas fórmulas tendrán en cuenta las posibilidades de crecimiento futuro de los recursos de las Entidades Locales procedentes de los tributos respecto de los cuales se establezcan los mencionados beneficios fiscales».*

Así, conjugando los principios de legalidad, reserva de ley, autonomía municipal y capacidad económica, el Legislador desde el año 2002, quiso gravar en mayor medida, una buena parte de las grandes infraestructuras, al considerar a las mismas como bienes inmuebles de características especiales, —así se desarrollará— por su mayor capacidad contributiva, sin que ello sea contrario al principio de igualdad, al dejar a los Entes Locales la capacidad suficiente para determinar el tipo de gravamen que desean aprobar a una Base imponible proporcionada por el Estado (Valor catastral) e imponer a los sujetos pasivos, siempre dentro de los márgenes establecidos por Ley.

En el caso concreto de las grandes infraestructuras, que venimos citando, las corporaciones Locales se han amparado en las leyes del Estado para aplicarlas, a través de sus correspondientes ordenanzas fiscales, única fórmula que podría asimilarles al término «establecer tributos», regulando, al menos, el tipo impositivo por el Ayuntamiento, que en el caso de los BICES es muy superior al de los bienes urbanos y rústicos y por ello proporcionan más ingresos.

No es que la autonomía local sea plena, que no lo es, y así el propio legislador en las últimas modificaciones legislativas que inciden y mucho en la tributación de las grandes infraestructuras, como lo fueron la Ley 48/2002 y 51/2002 de 27

de diciembre, y más tarde los Textos Refundidos, tuvo en cuenta las limitaciones legales y doctrinales de la autonomía y creación tributaria local, concretamente la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 239/1999 en su verdadera interpretación para convalidar las últimas leyes de régimen local.

Sin duda esta atribución de potestades tributarias nuevas desde la Ley de Haciendas Locales de 1988 a los Ayuntamientos, puesta en duda por otras administraciones como las Comunidades autónomas, ha sido cumplidamente resuelta por el TC a favor de los municipios, desde época bien temprana en el funcionamiento de tan alto Tribunal. La misma sentencia que acabamos de invocar considera:

*«Como señalamos en la STC 19/1987, conforme a los artículos 133.2 y 140 de la Norma Fundamental, la autonomía de las Corporaciones Locales se traduce en que estos entes habrán de contar con tributos propios y sobre los mismos deberá la Ley reconocerles una intervención en su establecimiento o en su exigencia (...).»*

Y dentro del análisis del principio de autonomía municipal, el Tribunal Constitucional en la relación de los tributos propios, seguía considerando:

*«... como expresamos en la misma STC 19/1987, corresponde al legislador, en virtud de los apartados 1 y 2 del artículo 133 CE integrar "las exigencias derivadas de la reserva de ley en el orden tributario y de la autonomía de las Corporaciones Locales —de los municipios, en el presente proceso— para intervenir, de acuerdo con la Constitución misma y con las Leyes, en el establecimiento o en la exigencia de sus tributos propios" (fundamento jurídico 4.º) Y aunque también hemos puntualizado que no es tarea de este Tribunal definir "positivamente cuáles sean los posibles modos de ajuste legislativo entre la autonomía municipal y la determinación por ley de los elementos esenciales de cada tributo" (Fundamento Jurídico 5.º), si hemos aclarado que respecto de los tributos propios de los municipios la reserva de ley ni "deberá extenderse hasta un punto tal en que se prive a los mismos de cualquier intervención en la ordenación del tributo o en su exigencia para el propio ámbito territorial", ni "tampoco podrá el legislador abdicar de toda regulación directa en el ámbito parcial que así le reserva la Constitución (artículo 133.1 y 2)". "Las leyes reclamadas por la Constitución en su artículo 133.2 no son, por lo que a las Corporaciones Locales se refiere, meramente habilitadoras para el ejercicio de una potestad tributaria que originariamente sólo corresponde al Estado; son también Leyes ordenadoras —siquiera de modo parcial, en mérito de la autonomía de los municipios— de los tributos así calificados de 'locales', porque la Constitución encomienda aquí al legislador no sólo el reconocer un ámbito de autonomía al ente territorial, sino también garantizar la reserva legal que ella misma establece (artículo 31.3)" (fundamento jurídico 4.º) ... Dicho de un modo más preciso, la radicación en un municipio (allí hacíamos la afirmación con respecto a las Comunidades Autónomas, pero puede trasladarse sin más problemas a las Corporaciones Locales) "puede ser, obviamente, una circunstancia que justifique un tratamiento fiscal distinto" al que se obtendría en otro municipio (Fundamento Jurídico 1.º). Concretamente, en relación con los tipos de gravamen aplicables en el más cercano antecedente del IBI —la Contribución Territorial Urbana—, señalábamos literalmente en la STC 19/1987: "Puede el legis-*

*lador estatal hacer una parcial regulación de los tipos del impuesto, predisponiendo criterios o límites para su ulterior definición por cada Corporación Local, a la que corresponderá ya, en ejercicio de su autonomía y en atención a las peculiaridades de su hacienda propia, la precisión de cuál sea el tipo que, de acuerdo con el marco legal, haya de ser aplicado en su respectivo ámbito territorial" (fundamento jurídico 5.º). La diversificación de los tipos impositivos —decíamos en el fundamento jurídico 4.º de la misma Sentencia— "puede, por ello, concebirse en abstracto, como acomodada a las exigencias del principio de igualdad, siempre que posea un fundamento justificado y racional y arranque de situaciones que puedan legítimamente considerarse como diversas" (...)».*

## **2. LAS INFRAESTRUCTURAS QUE HOY SON BICES, Y LA REPERCUSIÓN ECONÓMICA FAVORABLE EN EL TERRITORIO DE LOS AYUNTAMIENTOS**

El viento y el sol, recursos naturales con los que cuenta España en todas sus regiones, han venido a cambiar el horizonte de la producción de la energía, en especial desde la aprobación de medidas por la Unión Europea, leyes, reglamentos y demás sobre la preservación del planeta, el cambio climático y la potenciación de las energías renovables.

El agua otro recurso natural, cada vez más escaso, también es aprovechada a través de las infraestructuras hidráulicas como factor de producción de energía hidroeléctrica, y por ello tributan como BICES.

Ha existido un choque tradicional entre los recursos municipales y estatales y en los últimos años entre los municipales y los autonómicos ha hecho difícil la subsistencia de los recursos de los municipios.

## **3. EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE LAS GRANDES INFRAESTRUCTURAS Y SU PREVALENCIA SOBRE LA TRIBUTACIÓN AUTONÓMICA. SE CITA LA DEFENSA FRUSTRADA DEL MISMO IMPUESTO, PERO AUTONÓMICO POR PARTE DE EXTREMADURA, DONDE LOS TRIBUNALES ADVIRTIERON DE QUE NO PODÍAN CERCENARSE LOS TRIBUTOS LOCALES**

La prevalencia de la tributación local sobre la tributación autonómica en el caso de las infraestructuras, especialmente las energéticas, ha sido establecida, como decimos, por la doctrina del TC de manera que EL IBI, como impuesto municipal, sobrevive a la tributación autonómica, como veremos.

Así, las comunidades autónomas empezaron a tratar de crear sus propios tributos, chocando claramente con la *doble tributación* porque un mismo hecho había tributado ya en los tributos locales, como el IAE, o el IBI, defendiendo así la existencia de una «cierta potestad tributaria» por encima de la de las Comu-

nidades Autónomas, como así ha sido el caso de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de junio de 2006 (Sentencia Pleno 179/2006).

La pugna del poder autonómico contra el local, llegó a que la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, mediante Auto de 8 de febrero de 2005, elevaba al Tribunal Constitucional como cuestión de Inconstitucionalidad, la Ley de la Asamblea de Extremadura 7/1997 de 29 de mayo de Medidas Fiscales sobre *«producción y transporte de energía que incidan sobre el medio ambiente»*.

En el proceso compareció la propia Junta de Extremadura, el Estado, el Fiscal General, y la Asamblea de Extremadura, manteniendo cada uno de ellos posturas dispares sobre si la ley autonómica vulneraba el principio de autonomía municipal, y se producía una doble tributación contraria a la Constitución.

El TC fundamentaba su sentencia de 13 de junio de 2006, en que la Ley de la Asamblea de Extremadura de 29 de mayo de 1997 creaba un *«impuesto nuevo» sobre las instalaciones energéticas*, como un tributo directo y real sobre los elementos patrimoniales y era objeto del tributo los bienes muebles e inmuebles y demás derechos reales de los sujetos pasivos afectos a los procesos productivos energéticos.

Como recuerda el Alto Tribunal, y en ejecución de los acuerdos de la Comisión Bilateral de Cooperación, Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura de 17 de abril de 2005, aquella Comunidad aprobó la Ley 8/2005, introduciendo en el impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente las modificaciones pactadas con la Administración General del Estado, modificando así sustancialmente la Ley 7/1997 de 29 de mayo, si bien la cuestión de inconstitucionalidad a juicio del Alto Tribunal no había perdido su objeto, extendiéndose a la última norma legal citada.

En el Fundamento 3.º el TC sitúa la cuestión litigiosa en el «contexto del principio de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas» a quienes se posibilita, conforme al artículo 157.1 de la CE, y 4 y 5 de la LOFCA crear sus propios impuestos.

Pero entre los límites tributarios que cita el Alto Tribunal (STC 289/2000 de 30 de noviembre) se encuentra la prohibición de doble imposición establecida en el artículo 6 de la LOFCA:

*«precepto que somete la creación por las Comunidades Autónomas de tributos propios a dos límites infranqueables: de un lado dichos tributos "no podrán recaer sobre hechos impositivos gravados por el Estado" (art. 6.2 LOFCA); de otro lado, aunque "podrán establecer y gestionar tributos sobre las materias que la legislación de Régimen Local reserve a las Corporaciones Locales", sin embargo, sólo lo podrán hacer "en los supuestos en que dicha legislación lo prevea y en los términos que la misma contemple" (art. 6.3 LOFCA), supuestos que, conforme a la disposición adicional*

*quinta de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre (RCL 1988, 2607 y RCL 1989, 1851), reguladora de las haciendas locales (en la actualidad, disposición adicional primera del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (RCL 2004, 602, 670), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales), dictada en desarrollo de aquella previsión de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas, se extienden a la materia imponible reservada a las haciendas locales por el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y por el impuesto sobre gastos suntuarios (en su modalidad de aprovechamiento de cotos de caza y pesca)».*

Por otra parte conviene señalar que ya el art. 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, la «vieja ya» Ley General Tributaria, preveía que los tributos «además de ser medios para recaudar ingresos públicos, han de servir como instrumento de la política económica general, atender a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurar una mejor distribución de la renta nacional». Hoy es el art. 1 de la Ley General Tributaria actual 58/2003, de 17 de diciembre, el que reconoce que «*Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución*». Es decir, el tributo puede no ser sólo una fuente de ingresos, una manera de allegar medios económicos a los entes territoriales para satisfacer sus necesidades financieras (fin fiscal), sino que también puede responder a políticas sectoriales distintas de la puramente recaudatoria (fin extrafiscal), esto es, el legislador puede «configurar el presupuesto de hecho del tributo teniendo en cuenta consideraciones básicamente extrafiscales» (SSTC 37/1987, de 26 de marzo [RTC 1987, 37], F. 13; 197/1992, de 19 de noviembre [RTC 1992, 197], F. 6; 194/2000, de 19 de julio [RTC 2000, 194], F. 7; y 276/2000, de 16 de noviembre [RTC 2000, 276], F. 4).

De esa forma, el TC examina el hecho imponible del tributo autonómico como concepto estrictamente jurídico que configura cada tributo, cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria, en contraposición a la materia imponible u objeto del tributo, a fin de seleccionar si distintas circunstancias (la autonómica y la local) dan lugar a otros tantos hechos imponibles determinantes de figuras tributarias diferentes, los dos límites al poder tributario de las CCAA, a saber el hecho imponible gravado por el Estado y el hecho imponible de materias reservadas a las corporaciones locales; esto es lo que puede dar lugar a una duplicidad de hecho imponible, estrictamente o lo que es lo mismo la prohibición de doble imposición.

En el fundamento 5.º, el Alto Tribunal, una vez deja sentada la doctrina anterior resumida y citada, analiza que la Ley Extremeña 7/1997 grava una materia imponible reservada a las corporaciones locales, y más concretamente a la misma fuente de riqueza sometida a tributación por el IBI, y tras el análisis de la regulación de este último impuesto de bienes inmuebles municipales configurados en la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, actualmente Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la LRHL, ratifica afir-

mando que el IBI es un impuesto directo de carácter real que grava el valor de los inmuebles y cuyo hecho imponible viene constituido por la titularidad de una concesión administrativa, de un hecho real de superficie o de usufructo o de un derecho de propiedad, viniendo constituida su base imponible por el valor catastral.

Considera el Alto Tribunal que el IBI es un tributo con un fin fiscal, allegar medios económicos a las haciendas locales para financiar su gasto público, que grava como materia imponible o fuente de riqueza la capacidad económica que se pone de manifiesto por la mera titularidad como propietario, usufructuario, superficiario o concesionario, el día 1 de enero de cada ejercicio, de un bien inmueble.

Y establecía, en aquella ocasión, que el impuesto extremeño era también un tributo directo de carácter real que grava los elementos patrimoniales afectos a la realización de actividades que incidan en el medio ambiente señalando que el objeto del tributo son los «bienes muebles e inmuebles» afectados o vinculados a procesos productivos, prestaciones de servicios, ejecuciones de obras o realización de actividades destinadas a la producción, almacenaje, transporte, transformación efectuada por elementos fijos de suministro de energía eléctrica; el hecho imponible está constituido por tanto por la titularidad por parte del sujeto pasivo de los elementos patrimoniales situados en el territorio de la comunidad autónoma de Extremadura y son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas titulares de los elementos patrimoniales sometidos a tributación; su base imponible es el valor productivo de los elementos patrimoniales.

Uno de los fundamentos de la Sentencia, el sexto, acude al texto aprobado por el Parlamento balear que en parecidos términos fue declarado inconstitucional por la STC 289/2000.

A la vista del texto normativo la configuración del tributo extremeño mantenía sus elementos tributarios idénticos prácticamente a los del IBI, dado que en efecto la propia definición de su hecho imponible era la de un tributo que pretende gravar la titularidad de unas determinadas actividades y no grava directamente la actividad contaminante.

En esa «exquisita exposición jurídica» que hacía el TC declaraba la prohibición de la doble imposición contenida en el art. 6 LOFCA, citando, en cuanto a la definición legal del hecho imponible, la posterior STC 168/2004 de 6 de octubre (RTC 2004, 168), y su fundamento jurídico 10 a).

El Alto Tribunal analizaba pormenorizadamente las similitudes con otros tributos autonómicos declarados también inconstitucionales, como era el caso del ya citado **Impuesto balear**. Tampoco este tributo perseguía disuadir el incumplimiento de ninguna obligación, ni busca, en sentido positivo, estimular actuaciones protectoras del medio ambiente, en cumplimiento del art. 45.1 CE.

Y así, el Fundamento 7.º de la sentencia que analizamos, con remisión a la pronunciada en aquel supuesto de las Islas Baleares STC 289/2000 (RTC 2000, 289), se preguntaba que, *«si lo realmente gravado fuese la actividad contaminante se habrían sometido a imposición aquellas instalaciones, cualquiera que fuese la clase de actividad a la que se hallasen afectas que pudiesen atentar contra el medio ambiente que se pretende proteger, buscando un efecto disuasorio o estimulante de la realización de conductas dañinas o protectoras del entorno ecológico en el que se desenvuelve la actividad, lo que tendría, al menos, dos implicaciones. De un lado, se vincularía la tributación soportada a la consecución de la finalidad pretendida, esto es, se atemperaría el gravamen a la conducta de los sujetos contaminantes»*.

Fueron muchos casos autonómicos, como recordaba el TC, el denominado «impuesto andaluz sobre tierras infrautilizadas» y del «impuesto extremeño sobre dehesas calificadas en deficiente aprovechamiento», pues lo que realmente se sometía a tributación era la diferencia entre el rendimiento óptimo o potencial y el obtenido o real, respectivamente.

También sucedía en el tributo autonómico aprobado por el Parlamento de Cataluña «sobre elementos patrimoniales afectos a las actividades de las que puedan derivar la activación de planes de protección civil», en el que para la fijación del tipo aplicable o de la tarifa «el legislador autonómico ha empleado criterios no estrictamente vinculados con los ingresos de las empresas explotadoras de las instalaciones o que realizan las actividades, sino con su producción» (STC 168/2004, de 6 de octubre [RTC 2004, 168], F. 10 a)).

La propia realidad del tributo autonómico extremeño es que sometía a gravamen precisamente las mismas instalaciones y a los mismos sujetos pasivos que en el IBI, porque no se hablaba de otras instalaciones potencialmente contaminantes para el medio ambiente que las propias de las empresas eléctricas, y no de otra naturaleza, como sucedía en efecto con el gravamen de Cataluña sobre elementos patrimoniales afectos a las actividades de las que puedan derivar la activación de planes de protección civil en el que se somete a tributación cada una de *«las instalaciones y actividades en las que concurre una indudable peligrosidad para las personas y los bienes y a las que ha de hacerse frente mediante la activación de los correspondientes planes de protección civil»*, y no unas en concreto, como literalmente sucedía con el impuesto extremeño, pues como recordaba el TC en el fundamento 9.º de la sentencia que ahora analizamos:

*«el impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente de Extremadura grava la mera titularidad de bienes inmuebles, con independencia de su aptitud para incidir o no en el medio ambiente, incurriendo de este modo en la prohibición prevista en el art. 6.3 LOFCA (RCL 1980, 2165), por su solapamiento con la materia imponible del impuesto municipal sobre bienes inmuebles, reservada a las haciendas locales»*.



La postura del TC, como no podía ser menos, resaltó la defensa de los tributos locales, como una manifestación de la autonomía municipal constitucional.

Y es que con la nueva Ley de Haciendas locales de 1988, el primitivo artículo 61, ya configuraba al IBI, como *«un tributo cuyo hecho imponible está constituido por la propiedad de bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana» o en segundo término «por la titularidad de un derecho real de usufructo o de superficie o de una concesión administrativa sobre dichos bienes o sobre servicios públicos a los que estén afectados».*

Más tarde, por virtud de la modificación llevada a cabo por la Ley 51/2002 ultimada en la publicación del T.R. de la Ley de Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, el hecho imponible se establece, en primer lugar, por la mera titularidad de un derecho sobre concesión administrativa o sobre el derecho de propiedad del bien inmueble, para las grandes infraestructuras.

Es evidente por ello de que el pretendido Hecho Imponible del Impuesto extremeño solapaba o trataba de solapar idéntico hecho imponible que en el IBI.

La conclusión a la que llega por tanto el TC es que:

*«tanto uno como otro tributo gravan la mera "titularidad" de bienes inmuebles, todos en el tributo municipal, algunos en el impuesto autonómico cuestionado, pero en todo caso, "bienes inmuebles", y lo hacen en la persona de su titular, entendido éste de forma más o menos amplia, pues si el tributo local somete a tributación concretamente a quienes son titulares de un derecho de propiedad, usufructo, superficie o de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles o sobre servicios públicos a los que estén afectados dichos bienes, el tributo autonómico configura como sujeto pasivo genéricamente a quienes son titulares de los inmuebles gravados, entendiendo que es el titular quien realiza las actividades sometidas a tributación. Dicho de otra forma, el impuesto sobre bienes inmuebles grava la capacidad económica que se pone de manifiesto por la titularidad de bienes inmuebles; el impuesto extremeño sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente somete a tributación exclusivamente la capacidad económica exteriorizada también por la titularidad de bienes inmuebles por determinadas personas o entidades».*

El TC también en otras sentencias de 2006 dejó sentado que el solapamiento en cuanto a la materia imponible entre ambos impuestos se produce en la absoluta generalidad de los supuestos imaginables.

En cuanto a los elementos del tributo, la **base imponible** parece mucho más claro aún, ya que, y así lo considera el TC y puede apreciarse fácilmente de la lectura comparativa de la Ley de Haciendas Locales y de la Ley 7/1997 extremeña, la determinación de la base imponible en uno y otro caso tiene como «origen» o «referencia» el propio VALOR de los BIENES, que en el caso del IBI, tanto la primitiva configuración como el actual desdoblamiento de normas, por un lado la Ley del Catastro Inmobiliario y por otro la Ley de Haciendas

Locales en su artículo 66, difieren el concepto VALOR, al hallado por la metodología catastral, es decir el denominado «VALOR CATASTRAL», pese a que la redacción de la ley extremeña, tratando sin duda de apartarse de denominaciones comunes para salvar la «doble tributación» emplea otra fórmula y así el artículo 7.º y 8.º, «el valor productivo de los elementos patrimoniales», «valor» que se determina, bien por el resultado de capitalizar el promedio de los ingresos brutos de explotación o por la producción bruta de energía, bien por el número de kilómetros de estructuras fijas y de postes o antenas.

Si el VALOR CATASTRAL se determina, como así viene regulado en el artículo 22 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario de 5 de marzo de 2004, «con referencia al valor de mercado», en los bienes denominados de características especiales (BICES) como por ejemplo los de producción de energía eléctrica, autopistas de peaje, centrales nucleares, puertos etc. el valor de mercado, al ser de difícil justificación, dada la «falta de mercado» de inmuebles especiales o instalaciones, el propio catastro, luego de los estudios correspondientes, viene aplicando fórmulas de módulos cuya referencia en cuanto a valores ha sido reconocido no sólo a efectos catastrales y tributarios, sino también en materia urbanística cuando se trata de valorar determinados inmuebles a efectos de expropiaciones, juntas de compensación, etc.) y ello no sólo al suelo, sino también a los edificios y a las propias instalaciones, como se verá en otros capítulos de esta obra cuando analicemos el valor catastral concreto de las grandes infraestructuras BICES, y la similitud con el impuesto extremeño es evidente en cuanto a la fijación en ambos casos con referencia a sus valores; de ahí que en cualquier caso, tanto en el IBI como en el Impuesto extremeño se toma la Referencia de VALOR DE MERCADO, aunque como dice la STC que analizamos, la forma de llegar a su cuantificación sea diferente:

*«... En consecuencia, y a diferencia de lo que mantiene el Abogado del Estado, el impuesto extremeño —como hacía en su momento el impuesto balear declarado inconstitucional— se dirige única y exclusivamente a medir objetivamente el valor de los elementos patrimoniales afectos a las actividades que constituyen el objeto del gravamen en función de la capacidad productiva de la actividad gravada y no, como sería necesario si el impuesto fuese verdaderamente extrafiscal, a determinar la intensidad con la que las instalaciones gravadas inciden sobre el medio ambiente extremeño. A fin de cuentas, como mantenía el propio Abogado del Estado en el recurso de inconstitucionalidad núm. 3892/1997 —al que se ha hecho referencia anteriormente— y planteado en relación con este mismo impuesto, se trata de un tributo que "recae íntegramente y grava elementos materiales (en este caso, patrimoniales), gravados íntegramente por un impuesto municipal; se trata pues de un tributo sobre materias reservadas a las corporaciones locales", carente de la "habilitación legal expresa" que exige el art. 6.3 LOFCA (RCL 1980, 2165)» (pg. 11 del escrito de interposición).*

#### **4. LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LA PUGNA CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SE HA ACLARADO POSTERIORMENTE, AUNQUE SE HALLA PENDIENTE LA DEFINITIVA DEFENSA DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA (142 CE)**

Finalmente resaltar que como reconocía el T.C en favor de los municipios, las CCAA disponen, como se sabe, de otros recursos, principalmente los Impuestos de sucesiones, transmisiones patrimoniales, donaciones, etc., no pueden hacer recaer sus déficit presupuestario sobre la financiación local, y lo que se ha conseguido con este tipo de «experimentos autonómicos» es reafirmar una vez más la larga ya tradición jurisprudencial no sólo del Tribunal Supremo, sino como se ve, del Tribunal Constitucional que refuerza una y otra vez las tesis de la defensa de un tributo esencial, como veremos, para los Ayuntamientos como es el IBI en estas grandes infraestructuras, y máxime cuando, como en el caso del supuesto cuyo análisis nos ha ocupado, son los propios municipios los que «soportan» las cargas materiales y medioambientales de instalaciones y así recordaba el TC que la expresión «materia reservada» ha de interpretarse como sinónimo de «materia imponible u objeto del tributo» y sentar definitivamente el principio de que toda fuente de riqueza, renta o cualquier otro elemento de la actividad económica que el legislador decida someter a imposición, pertenece en a todas luces a la esfera de lo fáctico, en tanto que el hecho imponible es un concepto estrictamente jurídico que en atención a determinadas circunstancias la ley fija en cada caso para configurar cada tributo y cuya realización da origen al nacimiento de la obligación tributaria.

Lo cierto es que todas las CCAA han aprobado leyes medioambientales y tributarias, mermando la capacidad de los municipios.

#### **5. DE QUÉ INFRAESTRUCTURAS HABLAMOS AL OBJETO DE SU TRIBUTACIÓN EN EL IBI**

**¿Tributan todos los bienes considerados INFRAESTRUCTURAS, de los enumerados al principio de este capítulo ? NO**

No fue, sino hasta 14 años más tarde a la Ley 39/1988, en el año 2002, cuando todas las infraestructuras empezaron a tributar en el IBI, y se denominaron *BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (comúnmente BICES)*, con las leyes 48/2002 y 51/2002, cuyo proceso de nacimiento relataremos más adelante,. En suma, aquellos bienes hoy son BICES (Así tras aquellas leyes, la aprobación de los nuevos y actuales Textos Refundidos del catastro inmobiliario y Texto Refundido de Haciendas locales, ambos aprobados el mismo día 5 de marzo de 2004 por Reales Decretos legislativos 1 y 2/2004, y que, por ejemplo los antiguos y exentos saltos de agua, iban a tributar en el IBI «*ex novo*».

Dentro del recorrido histórico del nacimiento de tributos que gravan las infraestructuras hasta considerarse BIENES ESPECIALES, la ley tenía, como todas las innovadoras, una laguna legal sobre no sujeción de los saltos de agua desde el 1 de enero de 1990, entrada en vigor del IBI, aunque fuera como URBANA, pues se hallaban, como ya se ha dicho expresamente exentos de contribución y por ello del IBI, hasta el año 1992, época esta 1990-1992 en que los Ayuntamientos no pudieron percibir IBI de las grandes infraestructuras.

Para que este tipo de bienes, ahora especiales, pudieran devengar IBI como bienes urbanos (no había BICES entonces) previamente debía el Catastro, a nivel del Estado aprobar las bases, que no es otra cosa que LOS VALORES de este tipo de bienes inmuebles. Bases a obtener para las correspondientes PONENCIAS DE VALORES, igual que si fueran bienes urbanos, con la particularidad de que en esa época, para que tuvieran un valor catastral estos BICES, no tenía precedentes, como cualquier bien urbano lo tenía en los padrones de la vieja contribución urbana y es que, como se ha dicho, al NO estar sujetos algunas de las infraestructuras como los saltos de agua, nunca pagaron contribución.

Si la exención del IBI para estos bienes especiales, debían desaparecer desde el 1 de enero de 1992, el Catastro debía regular los valores que debía otorgar, a los que aplicar el tipo impositivo acordado en ordenanza por los ayuntamientos, o como previa la Ley de Haciendas, al ser un tributo obligatorio, de no tener regulado el ordenanza el Ayuntamiento, se le aplicaría un tipo residual, menor.

En 1991 no había otra fórmula que aplicar a los bienes urbanos que la Orden de 28 de diciembre de 1989, aprobando unas normas técnicas de valoración al suelo urbano y a las construcciones, que más adelante fue derogada por Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.

Llegados a este extremo, debe retrocederse a la propia Ley 39/1988 reguladora de las haciendas Locales, para aplicar la regulación del IBI de la que extraeremos la valoración de las infraestructuras que iban a tributar desde 1 de enero de 1992, es decir los datos tributarios o valores de las mismas a fin de poderse recaudar conforme al valor asignado la cuota tributaria municipal resultado de aplicar a aquel el tipo impositivo regulado en la ordenanza municipal.

## **6. LA REGULACIÓN DE LA TRIBUTACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) EN LA LEY ORIGINARIA 39/1988 DE HACIENDAS LOCALES. NO HABÍAN NACIDO AÚN LOS BICES**

El Artículo 61 definía el IBI como un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por la propiedad de los bienes inmuebles de

naturaleza rústica y urbana sitios en el respectivo término municipal, o por la titularidad de un derecho real de usufructo o de superficie, o de la de una concesión administrativa sobre dichos bienes o sobre los servicios públicos a los que estén afectados, y grava el valor de los referidos inmuebles.

Y relacionaba en el Artículo 62 qué bienes inmuebles tenía la naturaleza de URBANOS, empezando por el suelo, siguiendo con las construcciones, entendiendo por tales:

*1. Los edificios sean cualesquiera los elementos de que estén contruidos, los lugares en que se hallen emplazados, la clase de suelo en que hayan sido levantados y el uso a que se destinen, aun cuando por la forma de su construcción sean perfectamente transportables, y aun cuando el terreno sobre el que se hallen situados no pertenezca al dueño de la construcción, y las instalaciones comerciales e industriales asimilables a los mismos, tales como diques, tanques y cargaderos.*

*2. Las obras de urbanización y de mejora, como las exploraciones y las que se realicen para el uso de los espacios descubiertos, considerándose como tales los recintos destinados a mercados, los depósitos al aire libre, los campos o instalaciones para la práctica del deporte, los muelles, los estacionamientos y los espacios anejos a las construcciones.*

*3. Las demás construcciones no calificadas expresamente como de naturaleza rústica en el artículo siguiente.*

Y llegan las exenciones del Artículo 64:

Gozarán de exención los siguientes bienes:

- a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, y estén directamente afectos a la defensa nacional, seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios; asimismo, las carreteras, los caminos, los del dominio público marítimo terrestre e hidráulico y las demás vías terrestres que sean de aprovechamiento público y gratuito.
- b) Los que sean de propiedad de los municipios en que estén enclavados, afectos al uso o servicio públicos, así como los comunales propiedad de dichos municipios y los montes vecinales en mano común.
- c) Los montes poblados con especies de crecimiento lento de titularidad pública o privada.

Asimismo, los montes no contemplados en el párrafo anterior, en cuanto a la parte repoblada de las fincas en que las Corporaciones, Entidades y particulares realicen repoblaciones forestales, y también los tramos en regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal.

La exención prevista en este párrafo tendrá una duración de quince años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquél en que se realice su solicitud.

- d) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos fechado el 3 de enero de 1979 y en vigor el día 4 de diciembre del mismo año.
- e) Los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, con las que se establezcan los acuerdos de cooperación a que se refiere el artículo 16 de la Constitución, en los términos del correspondiente acuerdo.
- f) Los de la Cruz Roja Española.
- g) Los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática o consular, o a sus organismos oficiales, a condición de reciprocidad o conforme a los Convenios Internacionales en vigor.
- h) Los de aquellos Organismos o Entidades a los que sea de aplicación la exención en virtud de Convenios Internacionales en vigor.
- i) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas.

No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la Dirección ni las instalaciones fabriles.

Etc. Que no son del caso a esta obra.

Seguía la ley con la regulación del Sujeto pasivo del nuevo IBI y en el Artículo 66 La Base imponible que en el nuevo impuesto estaba constituida por el valor de los bienes inmuebles.

La propia Ley mezclaba las funciones del Catastro, gestión catastral, con las de los ayuntamientos, gestión Tributaria, hasta la reforma, tanto de la Ley del Catastro como de Haciendas locales en 2002 que más adelante se analiza.

De ese modo, el Artículo 69 establecía que *Los valores catastrales a que se refiere el apartado 2 del artículo 66 se fijan a partir de los datos obrantes en los correspondientes Catastros inmobiliarios*. Dichos valores catastrales podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización, según los casos, en los términos previstos en los artículos 70, 71 y 72 de la presente Ley, respectivamente.

Y el viejo Artículo 70 para la fijación de los valores catastrales se llevará a cabo con arreglo a los criterios de valoración regulados en los artículos 67 y 68.

A tal fin, se realizaría, previamente, una delimitación del suelo de naturaleza urbana ajustada a las disposiciones urbanísticas vigentes, que será publicada por medio de edictos. No obstante lo anterior, en aquellos términos municipales en los que no se hubiese producido variación de naturaleza del suelo, no se precisará dicha nueva delimitación. En todo caso los actos aprobatorios de delimitaciones del suelo serán recurribles en vía económico-administrativa sin que la interposición de la reclamación suspenda la ejecutoriedad del acto.

Una vez realizados, en su caso, los trabajos de delimitación del suelo a que se refiere el apartado anterior, se elaborarán las correspondientes Ponencias de valores en las que se recogerán los criterios, tablas de valoración y demás elementos precisos para llevar a cabo la fijación de los valores catastrales. En todo caso, estas Ponencias se ajustarán a las directrices para la coordinación nacional de valores.

En el artículo 73, se establecía la Cuota, devengo y período impositivo del IBI:

- 1. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.*
- 2. El tipo de gravamen será el 0,4 por 100, cuando se trate de bienes de naturaleza urbana y del 0,3 por 100, cuando se trate de bienes de naturaleza rústica.*
- 3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los Ayuntamientos podrán incrementar los tipos de gravamen que en el mismo se señalan hasta los límites que recoge dicho precepto.*

Y tras las exenciones el legislador estableció bonificaciones:

#### Artículo 74

1. Gozarán de una bonificación del 90 por 100 en la cuota del impuesto los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las Empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.

Los acuerdos relativos a los beneficios antedichos serán adoptados, a instancia de parte, por las Oficinas gestoras competentes, a las que corresponde la concesión o denegación singular de estas bonificaciones.

2. El plazo de disfrute de la bonificación comprenderá el tiempo de urbanización o de construcción y un año más a partir del año de terminación de las obras.
3. En todo caso el plazo de disfrute a que se refiere el apartado anterior no podrá exceder de tres años contados a partir de la fecha del inicio de las obras de urbanización y construcción.





ARANZADI  
DERECHO  
FISCAL

El Libro es un estudio detallado de la tributación local de los Bienes Inmuebles de Características Especiales, comúnmente conocidos como BICES.

La nueva figura jurídica nace con la reforma de la Ley de Haciendas Locales en 2002 y la nueva Ley del Catastro Inmobiliario del mismo año, luego recogidas en los Textos Refundidos, tanto del Catastro Inmobiliario como de Haciendas Locales de 2004.

Se trata un análisis de la regulación y conflictividad jurídica, tras la creación de esta nueva categoría catastral de los bienes inmuebles, de la que forman parte las centrales de producción de energía eléctrica, tanto nucleares como hidroeléctricas, térmicas, eólicas y solares-fotovoltaicas, gas y embalses, así como los puertos y aeropuertos, las autopistas de peaje, las refinerías de petróleo.

Constituyen los BICES una importante fuente de ingresos para los Ayuntamientos, cuya recaudación mayoritaria proviene del IBI.

La novedosa implantación y las importantes cuotas tributarias que pueden devengarse de estas grandes infraestructuras, ha traído consigo mismo un sinnúmero de litigios promovidos por los titulares o concesionarios de aquellas, hasta su pacificación por el Tribunal Supremo.

El conocimiento y práctica de este gran tributo, se refleja en los casos reales que expone esta obra y la necesidad de establecer una buena regulación por los ayuntamientos, principalmente en sus ordenanzas fiscales y en un buen sistema de recaudación.

La obra trae, para conocimiento práctico, multitud de sentencias dictadas por los tribunales en la tributación de cada uno de los grupos de BICES que dan a la misma la importancia práctica, como ayuda, a los Ayuntamientos.

Por otra parte la experiencia del autor en todos estos litigios le ha hecho conocedor en primera línea de la normativa en la materia.

ISBN: 978-84-1085-487-3



9

788410 854673



ER-0280/2005



GA-0009/0100